

CIUDAD REAL 4

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2009

► MUNICIPAL

El Ayuntamiento denuncia la actitud desleal de la Junta que «persigue» sus proyectos

Los 'populares' acusan al Gobierno de Barreda «poner piedras» en el desarrollo de la capital y dicen que el afán del delegado provincial «es que no salgan las cosas adelante»

• El alcalde en funciones y el portavoz denuncian la sanción de 24.000 euros por el vallado de la Atalaya y la concesión de un taller de empleo a Cañada en el término de la capital.

R. CH. / CIUDAD REAL

Perseguidos y atacados por la Junta de Comunidades. Así se sienten, nada más y nada menos, que el alcalde en funciones y el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Caballero y Francisco Cañizares, respectivamente, que denunciaron ayer que la Administración regional pretende «poner piedras en el desarrollo de la ciudad», al mismo tiempo que apuntaron «a su brazo ejecutor, el delegado provincial, José Fuentes, cuyo afán es que no salgan las cosas adelante».

Desde el Grupo Municipal Popular entienden que el Gobierno de Barreda mantiene una actitud «desleal» con el Consistorio «porque ya no es que no nos da lo que a otros, sino que nos lo quita». Una actitud que para los populares tiene un efecto «no sobre la alcaldesa, Rosa Romero, o los concejales, sino en los ciudadanos a los que se les quitan posibilidades». Ejemplos les sobran a los populares. Ayer citaron el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles del Hospital o la paralización de la apertura de la planta de residuos de la construcción. Una lista a la que ayer se sumaron otros dos nuevos agravios: una sanción de 24.000 euros por el vallado del parque forestal de la Atalaya y la concesión de una escuela taller en las proximidades del aeropuerto

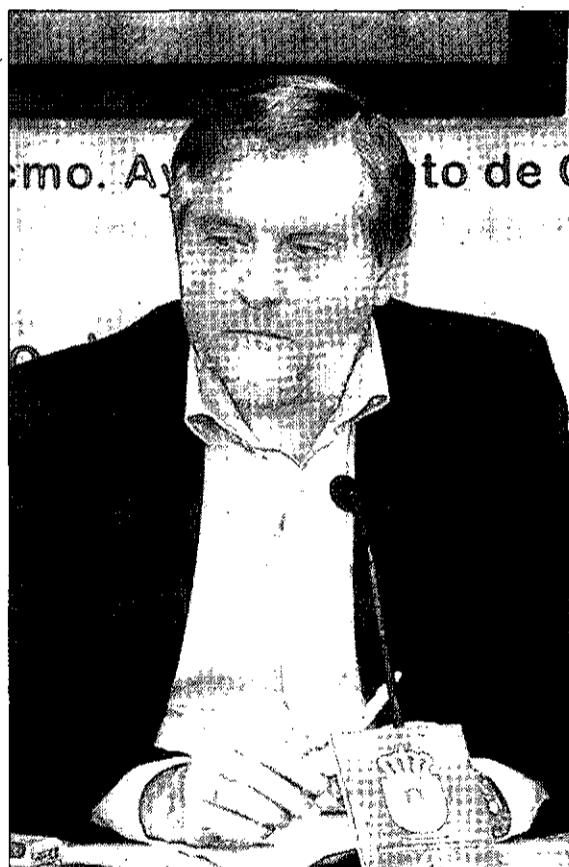
De este último, Caballero y Cañizares insistieron en que el Gobierno de Barreda ha adjudicado una escuela taller al Ayuntamiento de Cañada de Calatrava, localidad gobernada por el PSOE, en terrenos del término municipal de Ciudad Real. Los populares dicen que con esta actuación se beneficiarán doce puestos de trabajo y no de la capital, «a los que se está quitando la posibilidad de trabajar en un taller de



[]

Juan Caballero
Alcalde en funciones

Tenemos claro que la Junta no ayuda a Ciudad Real, y eso está clarísimo



[]

Francisco Cañizares
Portavoz del equipo de Gobierno

La bofetada que le quieren dar al Ayuntamiento se la dan a los ciudadanos

empleo que está en nuestro término municipal», con el añadido, según el Gobierno del PP, de que nadie ha solicitado a Ciudad Real los permisos necesarios para iniciar cualquier tipo de obra.

La escuela taller objeto de la polémica pretende recuperar una antigua fábrica en el entorno de la pista del aeropuerto y es una actuación que viene contemplada en la Declaración de Impacto Ambiental del Central. Desde el Gobierno de la capital entienden que esta situa-

ción no se hubiera producido de haber estado en la comisión que se encarga de velar por el cumplimiento de esa declaración y donde sí están municipios como Cañada, en cuyo término no se desarrolla ni un metro cuadrado del proyecto, mientras que en el 80% del Central está en terrenos de Ciudad Real, una exclusión que en el PP entienden que es «arbitraria e injusta».

En cuanto a la sanción impuesta por el cerramiento de la Atalaya, desde el Ayuntamiento dicen que

se produce por la diferencia de un kilómetro de vallado. El Consistorio entiende que son 3.000 los metros de vallas que hay y la Junta afirma que son 4.000. Ese kilómetro es clave porque justifica la existencia de un estudio de impacto ambiental que la Administración autonómica echa en falta ahora y por lo que sanciona con 24.000 euros.

Caballero dice que esta sanción se debe a «la mala fe» y que la Junta no se va a molestar «en ir a medir» el vallado instalado en la Atalaya

con fondos europeos.

Los populares dicen que si la forma de actuar de la Junta es la de abrir expedientes «es un mal ejemplo» ya que debe existir una «leal colaboración institucional entre administraciones» y recordaron el ejemplo del Museo de la Merced, inaugurado por la Junta hace cuatro años y que hasta esta misma semana no obtenía su licencia de funcionamiento porque el Gobierno autonómico no tramitó toda la documentación hasta hace unos días.

Un ciudadano recibe la vacuna contra la gripe común.



EN BREVE

La Atalaya

Una multa de 24.000 euros por un kilómetro de vallado. El reciente cerramiento del Parque Forestal de La Atalaya le puede costar al Ayuntamiento ese importe extra si se lleva adelante el expediente sancionador impuesto por la Junta que asegura que se han levantado cuatro kilómetros de vallas, lo que requiere una declaración de impacto ambiental previa que no ha existido. El Ayuntamiento invita a la Administración regional a coger un metro y contar el perímetro de la valla porque aseguran que hay 3.000 metros. Los populares creen que la Junta está actuando de mala fe y no se explican que pueda existir la diferencia de un kilómetro entre una medición y otra.

Taller de empleo

La Declaración de Impacto Ambiental del aeropuerto Central requería la recuperación de una antigua fábrica de tejas situada en las proximidades del aeródromo. En el Ayuntamiento dicen que esa fábrica está en terreno municipal de Ciudad Real y que, sin embargo, la Junta le ha otorgado una escuela taller a Cañada de Calatrava, municipio gobernado por el PSOE, para llevar a cabo esos trabajos de los que se van a beneficiar una docena de desempleados que no serán de la capital. En el PP entienden que esto no hubiera pasado si el Ayuntamiento hubiera estado desde el primer momento en la Comisión de Seguimiento de la DIA, de la que están excluidos «por motivos políticos y arbitrarios».